

REPUBLICA ARGENTINA  
**DIARIO DE SESIONES**  
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

33ª REUNION — 11ª SESION EXTRAORDINARIA — 13/14 DE ABRIL DE 1988

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,  
doctor **EDISON OTERO**;

del señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales,  
doctor **FERNANDO DE LA RÚA**,

y del señor presidente de la Comisión de Legislación General,  
doctor **ALBERTO J. RODRÍGUEZ SAA**

Secretarios: doctores **ANTONIO J. MACRIS** y **LEONARDO JUSTO PALOMEQUE**

Prosecretarios: doctor **ALBERTO J. IRIBARNE** y señor **DESIDERIO LAUREANO ALMIRÓN**

**FUNCIONARIOS INVITADOS:**

Señor ministro de Educación y Justicia,  
doctor **JORGE F. SABATO**  
Señor secretario de Educación,  
doctor **ADOLFO STUBRIN**  
Señor secretario de Coordinación Educacional,  
Científica y Cultural,  
doctor **RODOLFO PÉREZ**  
Señor subsecretario de Relaciones Educativas,  
doctor **HÉCTOR GUTIÉRREZ**  
Señor subsecretario de Gestión Educativa,  
doctor **JUAN CARLOS PUGLIESE**  
Señor subsecretario de Coordinación Administrativa,  
licenciado **HÉCTOR MACEIRA**

**SENADORES PRESENTES:**

**AGUIRRE LANARI**, Ramón  
**BENÍTEZ**, Alfredo L.  
**BRASESCO**, Luis A. J.  
**BRAVO**, Leopoldo  
**BRAVO HERRERA**, Horacio F.  
**BRITOS**, Oraldo N.  
**DE LA RÚA**, Fernando  
**FALSONE**, José A.  
**GENOUD**, José  
**GIL**, Francisco  
**GROSSO**, Edgardo Roger M.  
**GURDULICH de CORREA**, Liliana I.  
**JUÁREZ**, Carlos Arturo  
**LAFFERRIÈRE**, Ricardo E.  
**LEÓN**, Luis A.  
**MALHARRO de TUBRES**, Margarita  
**MARTIARENA**, José H.

**MAUHUM**, Fernando H.  
**MAZZUCCO**, Faustino M.  
**MENEM**, Eduardo  
**MOLINA**, Pedro E.  
**MURGUÍA**, Edgardo P. V.  
**NAPOLI**, Antonio O.  
**NIEVES**, Rogelio J.  
**OTERO**, Edison  
**RIVAS**, Olijela del Valle  
**RODRÍGUEZ SAA**, Alberto J.  
**ROMERO FERIS**, José A.  
**ROMERO**, Juan C.  
**RUBEO**, Luis  
**SAADI**, Ramón Eduardo  
**SALIM**, Luis  
**SANCHEZ**, Libardo N.  
**TENEV**, Carlos  
**TRILLA**, Juan  
**VELAZQUEZ**, Héctor J.  
**VIDAL**, Manuel D.

**AUSENTES, EN COMISION:**

**BERHONGARAY**, Antonio T.  
**GASS**, Adolfo  
**JIMÉNEZ MONTILLA**, Arturo I.  
**SOLANA**, Jorge D.  
**SOLARI YRIGOYEN**, Hipólito

**AUSENTES, CON AVISO:**

**AMOEDO**, Julio A.  
**CONCHEZ**, Pedro A.  
**DEL VILLAR**, Manuel  
**SAPAG**, Elías

## SUMARIO

1. Por invitación del señor presidente provisional del Honorable Senado el señor senador por Entre Ríos, don Luis A. J. Brasesco procede al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (Pág. 3096.)

2. Asuntos entrados:

- I. Comunicaciones de la Presidencia. (Página 3097).
- II. Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Pág. 3097.)
- III. Comunicaciones de señores senadores. (Página 3099.)
- IV. Comunicaciones oficiales. (Pág. 3099.)
- V. Dictámenes de comisiones. (Pág. 3099.)
- VI. Peticiones particulares. (Pág. 3100.)
- VII. Proyecto de comunicación del señor senador Molina por el que se solicita la restitución a sus beneficiarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (S.-105-618/88). (Pág. 3100.)
- VIII. Proyecto de declaración del señor senador Falsone por el que se expresa preocupación por la indiscriminada difusión de hechos luctuosos en medios gráficos y televisivos (S.-105-620/88). (Pág. 3101.)
- IX. Proyecto de comunicación de los señores senadores Benítez y Martiarena por el que se solicita al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria la apertura e implementación de un centro regional en Jujuy (S.-105-621/88). (Pág. 3101.)
- X. Proyecto de comunicación de la señora senadora Gurdulich de Correa por el que se solicitan informes acerca del cumplimiento de las normas establecidas en el decreto 505/58 (Estatuto Orgánico de Vialidad Nacional), con relación a la percepción y distribución de fondos en el último semestre (S.-105-622/88). (Pág. 3102.)
- XI. Proyecto de resolución del señor senador Juárez por el que se modifica el artículo 53 del Reglamento del Honorable Senado y se crea la Comisión de Intereses Marítimos y Fluviales (S.-105-623/88). (Pág. 3102.)
- XII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Malharro de Torres y otros señores senadores por el que se solicitan informes acerca de la existencia de inmuebles sin destino dentro del patrimonio del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, obtenidos como consecuencia de herencias (S.-105-624/88). (Pág. 3104.)

XIII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Rivas por el que se solicitan informes respecto a la extirpación ilegal de órganos (S.-105-625/88). (Pág. 3104.)

XIV. Proyecto de ley de los señores senadores Bravo y Gil por el que se autoriza al Poder Ejecutivo nacional a integrar un Fondo de Emergencia Educativa para solucionar los problemas que se originan en los aumentos de sueldos de los docentes (S.-105-626/88). (Pág. 3105.)

XV. Proyecto de ley de los mismos señores senadores por el que se crea el Fondo Federal de Inversiones para Educación y Cultura (S.-105-627/88). (Pág. 3106.)

XVI. Proyecto de comunicación del señor senador Juárez por el que se solicitan informes respecto del cumplimiento de la ley 23.109 por la que se otorgan beneficios a ex soldados que hayan participado en las acciones bélicas del Atlántico Sur (S.-105-628/88). (Pág. 3108.)

XVII. Proyecto de declaración del señor senador Solari Yrigoyen por el que se solidariza con el pueblo armenio ante el deseo de reunificación con la región de Nagorny Karabaj, incorporada a la República Socialista Soviética de Azerbaiján. (S.-105-629/88). (Página 3109.)

XVIII. Proyecto de ley del señor senador Velázquez por el que se incorpora un artículo a la ley 20.771, de estupefacientes (S.-105-630/88). (Pág. 3109.)

XIX. Proyecto de ley del señor senador Saadi por el que se establece un servicio gratuito de telegrama y carta documento para trabajadores, jubilados y pensionados, y por el que se deroga la ley 20.703 (S.-105-631/88). (Pág. 3110.)

XX. Proyecto de comunicación de la señora senadora Rivas por el que se solicita la inclusión en el temario a tratar en sesiones extraordinarias, del proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Salarios Docentes (S.-105-632/88). (Pág. 3110.)

XXI. Proyecto de ley del señor senador Rubeo por el que se consideran tareas insalubres las que se desarrollan en frigoríficos, y se extienden los beneficios de los decretos 3.555 y 8.746/72 a los agentes del Servicio Nacional de Sanidad Animal y de la Junta Nacional de Carnes que cumplen funciones de inspección (S.-105-633/88). (Pág. 3111.)

XXII. Proyecto de comunicación del señor senador Britos por el que se solicitan informes acerca de los incidentes ocurridos en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires (S.-105-634/88). (Pág. 3112.)

XXIII. Proyecto de ley de los señores senadores Sánchez y Menem por el que se establece la libertad de determinación de los medios y métodos de planificación familiar, y se declara el interés nacional del tema (S.-105-635/88). (Pág. 3112.)

XXIV. Proyecto de comunicación de la señora senadora Gurdulich de Correa por el que se solicita se refuerce la partida presupuestaria correspondiente a educación, de conformidad con los artículos 21 y 22 de la ley 23.548, de coparticipación federal de impuestos (S.-105-636/88). (Pág. 3114.)

XXV. Proyecto de ley de la señora senadora Rivas por el que se instituye el Sistema Nacional de Salarios para el Sector Docente (S.-105-637/88). (Pág. 3115.)

XXVI. Proyecto de resolución del señor senador Velázquez por el que se solicitan informes acerca del traslado de las oficinas comerciales de ENTEL, de Leandro N. Alem a Oberá, Misiones (S.-105-641/88). (Página 3118.)

XXVII. Proyecto de ley de los señores senadores Benítez y Martiarena por el que se otorga un subsidio a la Asociación Judicial de Jujuy (S.-105-642/88). (Pág. 3118.)

XXVIII. Proyecto de ley del señor senador de la Rúa por el que se sustituyen diversos artículos de la ley 19.987, Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en lo que respecta a la elección del intendente (S.-105-643/88). (Pág. 3118.)

3. Continúa la consideración de los dictámenes de la Comisión de Defensa Nacional, en mayoría y en minoría, en el proyecto de ley en revisión sobre defensa nacional (C.D.-105-74/87). Se aprueba. (Página 3120.)

4. Informe del señor ministro de Educación y Justicia. (Pág. 3131.)

5. Apéndice:

Sanción del Honorable Senado. (Pág. 3202.)

—En Buenos Aires, a las 18 y 27 del miércoles 13 de abril de 1988:

Sr. Presidente (Otero). — Queda abierta la sesión.

1

## IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Otero). — Invito al señor senador por Entre Ríos, don Luis A. J. Brasesco, a izar la bandera en el mástil del recinto.

—Puestos de pie todos los presentes, el señor senador Luis A. J. Brasesco procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2

## ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Otero). — Por Secretaría se va a leer la lista de asuntos entrados, que fueran girados a sus respectivos destinos de acuerdo con la autorización oportunamente conferida a esta Presidencia.

Sr. Secretario (Macris). — (Lee)

I

### Comunicaciones de la Presidencia

Decreto del 5 de abril por el que se deja sin efecto el D.P.-368/88, por el cual se designó al señor senador Brasesco como integrante de la comitiva del señor presidente de la Nación en su viaje a la República Federativa del Brasil (D.P.-393/88). (A sus antecedentes.)

—Decreto del 8 de abril referente al cumplimiento del régimen de promociones, designaciones y comisiones de servicio del personal. (D.P.-411/88). (A sus antecedentes.)

—Decreto del 11 de abril por el que se deja sin efecto a requerimiento del señor prosecretario parlamentario, doctor Alberto J. B. Iribarne, su designación para concurrir a la LXXIX Conferencia Interparlamentaria dispuesta por el decreto D.P.-351/88 (D.P.-413/88). (A sus antecedentes.)

II

### Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados

I

Modificación del inciso 1º del artículo 163 del Código Penal en lo que respecta al hurto de ganado. Proyecto de ley en revisión. (C.D.-105-85/88.)

Buenos Aires, 6 de abril de 1988.

Señor presidente del Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Sustitúyese el inciso 1º del artículo 163 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 163, inciso 1º — Cuando el hurto fuese de una o más cabezas de ganado mayor o menor o de productos separados del suelo o de má-



signación del intendente se refirió al Poder Ejecutivo, con acuerdo de este cuerpo.

Durante los debates a que dio lugar ese proyecto se citó el caso de la ciudad de Washington, a la que una ley había otorgado un gobierno comunal electivo, que una ley posterior le quitó. Precisamente, hoy en día Washington elige su alcalde, sin que obste a ello la residencia de las autoridades federales. Otras grandes capitales del mundo, como Roma, Madrid y París tienen sus alcaldes electivos, sin que se planteen conflictos con los gobiernos respectivos.

Volviendo a los antecedentes de nuestro país, no podemos dejar de citar los proyectos de los diputados Rabanal, Balbín, Frondizi, Illia, Dellepiane, Yadarola, Candiotti y Cattáneo en 1948; Zarriello y Belnicoff en 1958; Ghioldi en 1963; Patlis en 1965 y por último, el presentado en 1987 por el señor diputado nacional Jorge Vanossi, coincidentes en el mismo propósito, cual es que el intendente municipal surja del voto de la ciudadanía.

Es que, como se ha dicho en cada oportunidad en que el debate se ha planteado, parece una contradicción que la ciudad de Buenos Aires se vea despojada de un derecho que ejercen las capitales de provincia y hasta las más modestas poblaciones de la Argentina.

Urge brindar a los ciudadanos y a los extranjeros que se inscriban en el padrón habilitado a tal fin la posibilidad de ampliar su participación. En nuestros días esta participación corresponde a todos, así como en el pasado primaba una visión más restringida. El general Justo José de Urquiza, en los fundamentos del decreto que sirvió de antecedente a la ley de 1853 decía: "Que es propio y digno que la ciudad de Buenos Aires haga el ensayo de una institución tan benéfica, demostrando prácticamente las bondades del sistema municipal, que consiste en dejar los negocios populares a la libre administración de los que tengan más intereses en ellos y más capacidad para dirigirlos".

Esta "libre administración" es tanto más necesaria ante los problemas que presenta una gran ciudad, como es Buenos Aires. César Enrique Romero, distinguido constitucionalista, señalaba: "Sin temor a equivocarnos debemos decir que el más importante problema de gobierno actual en todos los estados es solucionar el problema de sus ciudades (habitación, educación, suministros, higiene, ética). Todos los problemas que antes eran generales, diríamos, se han urbanizado, se han reducido, en cuanto al ámbito de su diferencia espacial, para concentrarse, agudizándose y ahondándose, en el área de las ciudades". (*Derecho constitucional*, tomo I, página 101, edición 1975).

Si a estos argumentos agregamos que la propia Ley Orgánica Municipal permite, en sus artículos 10 y 11, a los representantes directos del pueblo de la Capital Federal destituir al Intendente designado por el presidente de la Nación por mal desempeño o delito en el ejercicio de sus funciones, la elección del mismo por los vecinos de dicha ciudad no encuentra obstáculo normativo alguno.

El diputado nacional Vicente C. Gallo cerraba su intervención en la sesión del 28 de septiembre de 1916 con estas palabras:

"Al proyectarse estas innovaciones, vinculando estos recuerdos, no puede haber sino un voto íntimo, que es el sentido de que esta reforma sea útil,

sea fecunda, mueva todas las actividades sanas de la ciudad de Buenos Aires, ponga en acción a su vasto electorado y lo lleve a constituir un gobierno comunal que siendo representativo de su voluntad, sea también capaz de regirla con eficacia y con dignidad bajo los auspicios de la libertad política plenamente asegurada para todos."

Invito a los representantes, en el Congreso, de las otras fuerzas políticas a acompañar esta iniciativa, y solicito a vuestra honorabilidad la aprobación de este proyecto de ley.

*Fernando de la Rúa.*

—A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sr. Presidente (Otero). — De acuerdo con lo resuelto por los presidentes de los diferentes bloques, los asuntos reservados mantendrán ese carácter en la próxima sesión.

(3)

## LEY DE DEFENSA NACIONAL

(Continuación)

Sr. Presidente (Otero). — Corresponde continuar con la consideración de los dictámenes de la Comisión de Defensa Nacional de mayoría y de minoría, en el proyecto de ley en revisión sobre defensa nacional.

Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Saadi. — (*Lee*) "Quiero hacer un somero análisis sobre este proyecto de ley de defensa, que ya fue extensamente debatido en las reuniones anteriores.

Los antecedentes parlamentarios de este proyecto y de otros que se presentaron se vinculan con el propiciado por el Poder Ejecutivo y que tuviera sanción de la Cámara de Diputados en 1985.

Asimismo, en el Senado se presentaron tres proyectos: uno, del senador Amoedo; otro de la senadora Gurdulich de Correa y el senador Saadi, y el último, del senador Bravo Herrera. En esta Cámara, la Comisión de Defensa Nacional produjo dictamen recomendando la aprobación de la iniciativa sancionada por Diputados, compatibilizada con el proyecto de la senadora Gurdulich de Correa y del senador Saadi. Dicho proyecto se aprobó con modificaciones en octubre de 1986 y fue devuelto a la Cámara de Diputados.

En el presente período extraordinario el Poder Ejecutivo ha remitido un nuevo proyecto a la Cámara Baja, obteniendo su sanción; luego fue enviado a la de Senadores y la comisión respectiva ha emitido un dictamen en que propicia aprobar el proyecto venido en revisión.

Quiero hacer un análisis sobre el concepto de defensa nacional.

La definición se encuentra en el artículo 2º de la sanción de la Cámara de Diputados, donde se restringe el concepto de defensa a "aque- llos conflictos que requieran el empleo de las fuerzas armadas".

La sanción del Senado de 1986 ampliaba el concepto de defensa, adoptando el criterio del proyecto de la senadora Gurdulich de Correa y del senador Saadi, más acorde con los princi- pios de la doctrina justicialista. El entonces co- ronel Perón, con motivo de la creación de la cá- tedra de Defensa Nacional en la Universidad de La Plata, en 1944, expresaba que las dos pala- bras, Defensa Nacional, pueden hacer pensar a algunos espíritus que se trata de un problema cuyo planteo y resolución interesa e incumbe únicamente a las fuerzas armadas de una nación. La realidad es bien distinta; en su solución en- tran en juego todos sus habitantes, todas sus energías, todas sus riquezas, todas sus industrias y producciones más diversas, todos los medios de transporte y vías de comunicación, etcétera, siendo las fuerzas armadas únicamente, como lo veremos en el transcurso de mi exposición, el instrumento de lucha de ese gran conjunto que constituye la nación en armas.

En el mismo sentido, el artículo 20 del proyec- to en consideración define a las fuerzas armadas como un instrumento militar de la defensa na- cional. Por lo tanto, si son sólo un instrumento de la defensa nacional, ésta no puede limitarse al empleo exclusivo de dicha fuerza.

En el proyecto en estudio se mantuvo el con- cepto de que la defensa nacional implica en- frentar sólo agresiones de origen externo. Pa- rece adecuada la diferencia que surge del ar- tículo 4º entre defensa nacional y seguridad nacional. Pero el señor ministro, en la interpe- lación del 17 de febrero de 1988, al contestar la pregunta del diputado Zaffore, manifiesta que la actuación de las fuerzas armadas tiene que estar enmarcada en el ámbito de la defen- sa nacional por una ley de defensa, y en el ám- bito de la defensa de las instituciones de la República por una ley que se refiera al tema. Con ello se advierte que se contradice el pensa- miento de los miembros del Poder Ejecutivo con lo expuesto en el proyecto.

Por ello considero conveniente que, para una futura interpretación de la ley, se incorporen en el Diario de Sesiones los conceptos de agresión interna y de agresión militar. La agresión inter- na se define en términos de los ataques arma- dos que realicen individuos, grupos u organiza- ciones contra el sistema institucional, y la agre-

sión militar se define como el alzamiento contra las autoridades constitucionales e integrantes de las fuerzas armadas o de seguridad. Esta inclu- sión resulta concordante con lo dispuesto por el artículo 13 del proyecto, ya que en éste se establece que el cuadro anexo es parte inte- grante de la ley.

En este momento me resulta caro hacerles presente a mis pares que, en la delimitación de los espacios abarcados por la defensa nacional, el proyecto que estamos tratando ha incluido expresamente las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur en el artículo 5º, sien- do la fuente inmediata de esta redacción el pro- yecto de los señores senadores Gurdulich de Correa y Saadi.

Merece también especial mención la amplia- ción de los componentes del Consejo de Defen- sa Nacional —artículo 14— incorporando a re- presentantes de las comisiones de Defensa del Senado y de Diputados, lo que permite una participación concreta de este poder del Estado en el asesoramiento del presidente de la Na- ción para la adopción de estrategias de defensa nacional. Esta disposición reconoce igual fuen- te que el comentado artículo 5º.

Celebramos que se haya incluido la prohibi- ción a los organismos de inteligencia militar de trabajar en las cuestiones de política interna del país, contribuyéndose de este modo en forma directa al cumplimiento de las facultades con- feridas.

En el debate dentro y fuera del Congreso se planteó si este proyecto deroga la llamada "do-ctrina de la seguridad nacional", que tuvo vigen- cia durante el Proceso de Reorganización Na- cional, con el resultado de muertos y desapare- cidos que todos conocemos. La doctrina de la seguridad nacional no es otra cosa que el Plan de Defensa Continental elaborado por la Junta Interamericana de Defensa, por el cual la de- fensa del continente estaría a cargo de los Es- tados Unidos, siendo misión de las fuerzas ar- madas locales constituirse en gendarmes inter- nos para vigilar el orden y, en caso de que éste peligre, intervenir en la conducción polí- tica del país. De esta manera a las fuerzas te- rrestres se les asignaba la misión de policías interiores de la seguridad del Estado; a las ma- rítimas, custodiar la libre navegación de las ma- rinas occidentales en el Caribe y en el Atlántico Sur; y a las aéreas, cooperar con las anteriore con el objetivo de aniquilar al enemigo interior para lo cual debían adecuar su capacidad bélica con ese destino. En definitiva, la doctrina de la seguridad nacional tenía como objetivo involu- crar a los países de toda América en el confli-



to Este-Oeste, según los planes estratégicos señalados por la potencia dominante, los Estados Unidos de América.

Las consecuencias de la aplicación de esta doctrina fueron nefastas para el país y para las fuerzas armadas; a éstas las desprofesionalizó, llevándolas a realizar tareas para las cuales no estaban destinadas, degradándolas hasta hacerlas incurrir en hechos delictivos y marginándolas del pueblo, del cual deben nutrirse.

Al país le acarreo la instrumentación de políticas económicas al servicio de intereses extranacionales, la destrucción del potencial económico nacional y un desmedido endeudamiento que hipotecó el futuro de los argentinos por varias generaciones.

Haciendo una breve reseña histórica, debo decir que en 1940 se realizó la Segunda Reunión de Consulta de Cancilleres de las Repúblicas Americanas en La Habana. Los Estados Unidos de América todavía no habían entrado en la guerra, pero ante una eventual intervención elaboraron el principio de "seguridad continental". En dicha conferencia se estableció la primera vez el concepto de que la agresión de una nación no americana contra alguna del continente se consideraría como un ataque contra todas.

En 1942, aprovechando el ataque japonés a Pearl Harbor, se realizó la Tercera Reunión de Consulta de Cancilleres, en Río de Janeiro, la cual aprobó la creación de la Junta Interamericana de Defensa como el primer órgano de defensa continental, que sería presidido en forma permanente por un oficial norteamericano y pondría la estructura de defensa americana al servicio de la defensa de los Estados Unidos de América.

En 1947 se firmó el TIAR, cuyo artículo 3º dice que un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado americano será considerado como un ataque contra todos los estados americanos y, en consecuencia, cada una de dichas partes contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa.

So pretexto de una pretendida solidaridad continental, con la firma de este tratado las naciones latinoamericanas y del Caribe quedaron comprometidas en el conflicto Este-Oeste, al cual son ajenas.

La guerra de las Malvinas demostró que este tratado sólo tenía por objetivo involucrar a los países miembros en los planes de defensa de la potencia dominante. Cuando hubo una verdadera agresión extracontinental, como fue la

británica en las Malvinas, no sólo no se puso en ejecución el tratado sino que los Estados Unidos de América se aliaron a la potencia agresora en contra de los legítimos derechos territoriales de un país miembro.

En 1948 se crea la Organización de Estados Americanos, en cuya carta de constitución se previó la formación de un comité consultivo de defensa que nunca llegó a materializarse, por lo que la Junta Interamericana de Defensa cumplió las funciones de organismo militar de las naciones del continente y de esa manera delineó la política de defensa para las naciones latinoamericanas. A través de las llamadas "recomendaciones" se estableció lo que debían hacer los ejércitos americanos y, lo que es más lamentable, se nos indicó quién era el enemigo.

Así involucrados en esta estructura de defensa continental al servicio de la nación del Norte, no fue enemiga Gran Bretaña en 1982 y sí lo fueron durante la Segunda Guerra Alemania, Italia y Japón y después la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Más tarde, el "enemigo ideológico" se encontraría dentro de nuestras fronteras. De esta manera, las fuerzas armadas locales cumplirían el papel de fuerzas de seguridad de sus países siendo su objetivo la represión del enemigo interno y dejando en manos de los Estados Unidos de América la defensa exterior del continente.

Hacia 1955 llega a nuestro país una misión militar francesa y con ella penetra en nuestro ejército la "doctrina de la guerra contrarrevolucionaria", que aportará nuevas tácticas para la lucha contra el comunismo y la participación de las fuerzas militares en ella.

Esta nueva metodología era la aplicada por los franceses en Indochina y Argelia, es decir, por una potencia colonialista contra los movimientos de liberación nacional que luchaban por su independencia.

Lamentablemente, esta doctrina fue adoptada por el ejército argentino para aplicarla dentro del territorio nacional y contra sus propios ciudadanos. Este gravísimo error tuvo sus consecuencias más dramáticas durante el Proceso de Reorganización Nacional, con el saldo de muertos y desaparecidos y la profundización del abismo entre la sociedad civil y la militar.

En 1960, por iniciativa del comandante del ejército norteamericano en el Caribe, mayor general Bogart, en Fuerte Amador, Panamá, se reúnen por primera vez los comandantes de ejércitos americanos con motivo de afianzar los lazos de amistad, estudiar planes de apoyo y

cooperación, la situación del comunismo mundial y su penetración en latinoamérica.

Desde entonces las reuniones se fueron repitiendo anualmente, imitando el ejemplo las fuerzas marítimas y aéreas. En 1964, en la V Conferencia celebrada en West Point, el general Onganía —en representación del Ejército Argentino— lanzó la que se daría en llamar la doctrina West Point. Se establece el derecho de intervención del poder militar local contra los gobiernos locales que violen las leyes o no den solución a los problemas nacionales.

Dos años más tarde este general derrocaría al presidente constitucional Arturo Illia, instaurando la dictadura militar que se prolongaría hasta principios de 1973. Ese mismo año se reúne la X Conferencia de Ejércitos Americanos. Como consecuencia de los cambios políticos producidos en la Argentina y Perú estos dos países llevan a la conferencia una moción que intenta sin éxito revertir la posición oficial apoyada por los Estados Unidos.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Honorable Senado, senador Fernando de la Rúa.

Sr. Saadi. — El general Carcagno defendió esta propuesta que propugnaba el reconocimiento de la existencia del conflicto Norte-Sur, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el pluralismo ideológico, la delimitación de otras formas de agresión y de otros agresores además del comunismo internacional y la evaluación de otros factores que influyen sobre la seguridad como los económicos, políticos y sociales.

Dos años después, en la XI Conferencia de Ejércitos Americanos llevada a cabo en Montevideo, el general Videla, dando por tierra la posición sustentada por Carcagno anunciaría: 'Si es preciso, en Argentina van a morir todas las personas que sea necesario para lograr la seguridad del país'.

El resto de la historia es reciente. Con la guerra de las Malvinas en 1982 y la descarada complicidad norteamericana a favor de Gran Bretaña para el mantenimiento de una base de la OTAN en el Atlántico sur se desmorona el Sistema Interamericano de Defensa y el TIAR pasa a ser papel mojado. La derrota argentina en Malvinas va a revelar la crisis a que fueron llevadas las fuerzas armadas argentinas por la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional. Preparadas para combatir al enemigo inferior fueron incapaces de hacer frente al enemigo real. Sin la logística adecuada para ello,

sin una doctrina ni planeamiento militar conjunto soportaron —con heroísmo en muchos casos— la derrota que comenzara no con la llegada de los ingleses a Puerto Argentino sino muchos años antes, cuando adoptaron una doctrina militar y política que las distanció de su pueblo.

Quiero hacer algunas reflexiones sobre un tema que deberá ser objeto de legislación en función de lo que establece el artículo 46, inciso b) del proyecto de ley en consideración, cual es el de la producción para la defensa.

Creemos ser coherentes con la línea argumental de nuestra exposición si señalamos la importancia que tiene para la defensa nacional una substancial revitalización y modernización de nuestra producción industrial militar.

Cuando denunciemos los efectos nocivos de la doctrina de la seguridad nacional en nuestro país, advertimos que la dependencia en materia de defensa, también tuvo como consecuencia el paulatino desmantelamiento de la industria militar nacional.

La política norteamericana en la región determinó una virtual división internacional del trabajo. Al Brasil se le asignó el papel de productor industrial de material de defensa y a la Argentina el de productor de materias primas.

Esta política se advirtió en 1951, cuando el Congreso de los Estados Unidos dictó la ley Nº 165, de Seguridad Mutua, por la que se permitía que naciones americanas intercambiaran material de guerra.

De hecho, quien estaba en condiciones de prestar armamento militar era sólo Estados Unidos, con el aditamento del derecho a establecer en el país receptor una misión militar con fines de asesoramiento. Por supuesto, el material facilitado a nuestros países fue el apropiado para la represión interna: armamento ligero, material de comunicaciones y de transporte, y no el adecuado para la guerra abierta internacional, como serían los blindados o la artillería pesada.

Ya en 1944, el coronel Perón, por entonces ministro de Guerra, en la disertación aludida anteriormente advertía del peligro que implicaba para la defensa nacional la inexistencia de producción material propia, así como el derroche de divisas que significaba la adquisición de material de guerra en el exterior.

Somos conscientes de que este problema no se resuelve sólo con voluntarismo. Si pusiéramos el acento únicamente en la producción de material militar adecuado a las hipótesis de conflicto y de guerra posibles, que asegurase el abastecimiento de las necesidades propias de

nuestra defensa, habríamos logrado satisfacer uno de los objetivos, pero, seguramente, hubiéramos creado un desequilibrio económico financiero que el país no está en condiciones de soportar.

Son dos los problemas que deben conciliarse: el económico y el de la defensa nacional. Por eso proponemos el fomento de la actividad industrial de defensa que tenga por objetivo la exportación.

Para lograr productos competitivos será necesario privilegiar aquellos proyectos que incluyan diseño propio y tecnología de última generación. Esta puede alcanzarse a través del esfuerzo propio de nuestros técnicos y científicos —los tenemos y de primera magnitud— y del aporte de tecnología por parte de otros países amigos, para lo cual deberán promoverse convenios de cooperación técnica e industrial.

El desarrollo de la industria bélica no debe entenderse como refido con la democracia ni con la alternativa del crecimiento industrial en otras áreas, sino todo lo contrario. Como lo demuestran las experiencias de países democráticos como Alemania Occidental, Francia, Italia y España, la industria de defensa ha servido como complemento y en muchos casos como generador del desarrollo industrial al estar íntimamente ligada a la investigación científica.

El gasto militar deberá estar destinado a aquellas áreas que sean compatibles con el crecimiento y desarrollo económico. Así será rentable aquella producción que tenga capacidad exportadora, que deberá ser orientada en primer lugar hacia los países latinoamericanos, juntamente con planes de cooperación mutua industrial y tecnológica, acordes con una política de defensa continental independiente.

En conclusión, creo que no es posible una doctrina de defensa nacional que no vaya acompañada de un proyecto político de nación independiente y viceversa. Al mismo tiempo, entendemos que no será posible una doctrina de defensa independiente sin el desarrollo de la industria nacional de defensa que nos libere de la dependencia logística con las potencias dominantes."

**Sr. Presidente** (de la Rúa). — No habiendo más oradores anotados, se va a votar en general el proyecto.

Se va a llamar para votar...

**Sr. Menem**. — Ya tenemos número, señor presidente.

**Sr. Presidente** (de la Rúa). — Se va a votar en general el dictamen en mayoría.

**Sr. Presidente** (de la Rúa). — En consideración en particular.

—Se lee y aprueba el artículo 1º.

—Se lee el artículo 2º.

**Sr. Martiarena**. — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (de la Rúa). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

**Sr. Martiarena**. — En mi exposición anterior, durante el debate en general, había propuesto que el artículo 2º quedara redactado de la siguiente manera: "La defensa nacional debe realizarse por la integración y acción coordinada de todos los elementos y recursos humanos, materiales y morales de la Nación, para la solución de aquellos conflictos que lo requieran y especialmente con la actuación de las fuerzas armadas en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo".

He dado ya los fundamentos de mi petición en el sentido de que tal como está redactado el artículo 2º en este proyecto se da preeminencia a la presencia de las fuerzas armadas, desvirtuando así la concepción admisible de la defensa nacional como la actuación de todos los elementos y recursos humanos y materiales.

El texto que propongo recoge el concepto que, desde la conferencia que diera el general Perón, tantas veces citada en estas sesiones, hasta ahora, ha significado la concreción de lo que debe entenderse por defensa nacional.

**Sr. Presidente** (de la Rúa). — Tiene la palabra el señor senador por Misiones.

**Sr. Velázquez**. — Señor presidente: es a los efectos de manifestar, en ausencia del señor miembro informante que, independientemente de los argumentos expresados por el señor senador Martiarena, la comisión no hace lugar a la modificación propuesta, razón por la cual mantenemos el texto original.

**Sr. Presidente** (de la Rúa). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º tal como figura en el dictamen de comisión.

—La votación resulta afirmativa.

—Se leen y aprueban los artículos 3º y 4º.

—Se lee el artículo 5º.

**Sr. Martiarena**. — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (de la Rúa). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

**Sr. Martiarena**. — En mi exposición durante el tratamiento en general ya había objetado también la redacción del artículo 5º del proyecto, haciendo notar que la frase: "...con los alcan-



ces asignados por las normas internacionales y los tratados suscritos o a suscribir por la Nación...”, cuando fija el ámbito de aplicación de la ley de defensa nacional, es contraria al interés de la República en materia internacional.

Cité la doctrina del *estoppel*, que indicaría que si un país ha admitido de algún modo una circunstancia en un instrumento como es esta ley, no podría luego alegar que su ámbito territorial, insular y marítimo son otra cosa que lo que determinen las normas internacionales. Y estas normas equivalen en nuestro derecho positivo nacional, y se ha sostenido siempre así en el derecho internacional, al “derecho de gentes” mencionado en el artículo 21 de la ley 48 en último término.

De manera que mi propuesta es la siguiente: “...con los alcances que resultan de sus derechos derivados de los antecedentes históricos, del reconocimiento de las naciones, de la soberanía, jurisdicción y posesión que ejerce y/o le pertenecen, así como de las normas internacionales y tratados suscritos o que se suscriban, en concordancia con ello”.

Frente a los conflictos existentes, sobre todo con la potencia usurpadora, Gran Bretaña, en el territorio insular argentino, de ninguna manera podemos en una ley como ésta, tan luego la de defensa nacional, hacer una referencia que parece dar prioridad a lo que se exprese en las normas internacionales.

Se trata de una expresión difusa que descoloca la posición argentina en materia internacional frente a los conflictos existentes o que puedan presentarse.

De manera que la redacción que propongo tiende a reafirmar el concepto de que nuestra soberanía es sobre todos los territorios, de acuerdo con los derechos que resultan de los antecedentes históricos, del propio reconocimiento que se ha hecho en la comunidad de las naciones en diversas oportunidades y de la soberanía, jurisdicción y posesión que se ha ejercido o que le pertenece.

**Sr. Presidente** (de la Rúa). — Tiene la palabra el señor senador por Misiones.

**Sr. Velázquez.** — Quiero dejar expresa constancia de que la oposición a las modificaciones que sugiere el señor senador Martiarena en modo alguno obedecen a una actitud caprichosa de esta bancada. Acá no estamos debatiendo la ley de defensa de la Unión Cívica Radical, estamos considerando la ley de defensa que fue compatibilizada con el Partido Justicialista y otras agrupaciones políticas.

Por ello, en nombre y representación de la comisión, no hacemos lugar a la sugerencia propuesta.

**Sr. Presidente** (de la Rúa). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. Trilla.** — El señor senador Velázquez ha expresado con claridad la posición de la bancada radical como consecuencia de los intensos análisis efectuados sobre este proyecto de ley en las oportunidades anteriores: en la revisión en primera instancia y, a posteriori, en el tratamiento del nuevo proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, donde se aunaron los esfuerzos realizados en los estudios efectuados juntamente con miembros de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados en los que participaron dirigentes tanto de la Unión Cívica Radical como del Partido Justicialista y de otras agrupaciones políticas, que a su vez se pronunciaron por la aprobación de este proyecto o su rechazo en la Mesa de Consenso.

Estos trabajos permitieron determinar, en definitiva, el articulado de este proyecto más allá de las opiniones particulares y los deseos de los señores senadores y diputados y de lo que establecen en sus plataformas los partidos políticos.

Este ha sido un trabajo elaborado juntamente con otras agrupaciones políticas y constituye uno de los llamados proyectos de consenso.

De tal manera que en lo que respecta a lo decidido oportunamente, a los efectos de lograr la unidad conceptual del proyecto y en razón de las distintas modificaciones efectuadas previamente a su tratamiento en Diputados y ahora en el Senado, y los análisis efectuados en su oportunidad en el Ministerio de Defensa y luego en la Mesa de Consenso —en el Ministerio de Relaciones Exteriores—, consideramos que no puede ser modificado este artículo de la manera en que ha indicado el señor senador por Jujuy.

Por ello, vamos a votar este artículo tal cual ha sido redactado.

**Sr. Presidente** (de la Rúa). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

**Sr. Martiarena.** — De las manifestaciones de los señores senadores preopinantes se desprende que el único argumento que hay para oponer una objeción a mi redacción es que esto ha sido elaborado por consenso.

Es decir, no escuchamos en el recinto un planteo que haga a la defensa de la soberanía nacional en el ámbito del derecho internacional, donde esta ley va a tener repercusión en algún momento o podría tenerla. No escuchamos un

solo argumento que contradiga lo que estoy manifestando para sostener la modificación que he propuesto.

Lamento que el señor miembro informante de la comisión no se encuentre presente; sobre todo porque ha sido muy drástico y duro en sus manifestaciones, haciendo aparecer como que el bloque justicialista, de alguna manera, se oponía a la sanción de este proyecto de ley.

Y deseo que quede expresamente claro que no solamente queríamos la sanción de este proyecto sino que a lo largo de todos estos años —desde 1985 hasta ahora— hemos insistido muchas veces en su tratamiento. Pero no por esto debemos aceptar la redacción que se dé a su texto porque así se haya acordado, sin advertir respecto de las consecuencias que pudieran tener los términos empleados.

Me hubiera gustado escuchar alguna refutación de lo que yo he dicho, que no es antojadizo ni individual, sino que surge de lo que se encuentra establecido por los tratados, por la Constitución Nacional y por la legislación vigente en el sentido del orden de prioridad de las leyes, teniendo en cuenta las normas del derecho internacional. De ninguna manera éstas pueden estar por encima de las circunstancias que indican la Constitución y la ley 48.

Respecto de este punto, se me ha dicho nada más que fue consensual. Estoy de acuerdo con que los partidos han entrado en el terreno de la concertación para la redacción definitiva de las leyes, pero considero que si alguno de nosotros advierte una redacción inconveniente, puede señalarlo y someterlo a la consideración de sus pares.

Debo suponer que el presidente de la comisión habría tenido para hoy algún argumento al respecto; no oculté mi postura sino que en el momento de opinar con referencia al proyecto en general expresé mi posición de una manera terminante, manifestando la relación que tienen estas cláusulas con el texto general del proyecto.

Lamentablemente se estima que esto no es otra cosa que el resultado de un consenso; entonces, el consenso es más importante que una consideración que se realice en el Senado. De todas maneras dejo bien establecido que lo que he propuesto no se basa en una actitud caprichosa sino que resulta fundada y fundamental, teniendo en cuenta el texto de una ley tan importante como la de defensa nacional que, tal como lo señaló el señor senador Berhongaray, nuestro "querido ejército" está esperando desde hace tantos años. Nosotros estamos dispuestos a sancionarla, pero haciendo escuchar nuestras

opiniones respecto de los aspectos que consideramos pueden mejorar y adecuar el texto de la ley de defensa nacional al orden jurídico y constitucional general del país.

**Sr. Presidente** (de la Rúa). — Tiene la palabra el señor senador por Misiones.

**Sr. Velázquez.** — No quiero entrar en el terreno de la polémica pero deseo dejar expresamente sentado lo siguiente.

Considero y asumo la responsabilidad de rechazar enfáticamente lo manifestado por el señor senador Martiarena con relación a las supuestas expresiones vertidas por el señor presidente de la comisión, señor senador Berhongaray, que lamentablemente se encuentra ausente.

En ningún momento —y me remito al Diario de Sesiones— hizo referencia expresa a que no se haya votado el proyecto por falta de quórum motivado por el justicialismo. Que quede esto bien en claro, porque no es su estilo ni el de los integrantes de la bancada de la Unión Cívica Radical formular imputaciones de esta naturaleza.

Si vamos a entrar a hacer un análisis minucioso de la cuestión me remito a lo que recientemente, en su primera interrupción, manifestara el señor senador Martiarena; éste es un proyecto que fue minuciosamente debatido en la sesión anterior, razón por la cual me parece que flaco favor le hacemos a la ley que todos tanto pretendemos sancionar para nuestro Ejército Argentino si entramos nuevamente a hacer un análisis y debate pormenorizado de su texto.

Por las razones expuestas, reitero, señor presidente, la comisión no hace lugar a lo sugerido por el señor senador Martiarena.

**Sr. Presidente** (de la Rúa). — La comisión no acepta la propuesta del señor senador por Jujuy.

Se va a votar el artículo 5º tal como figura en el dictamen de la comisión.

—Luego de unos instantes:

**Sr. Presidente** (de la Rúa). — Ruego a los señores senadores mantener indicado el sentido de su voto para que por Secretaría se pueda efectuar el recuento.

**Sr. Brasesco.** — Pido que se vote nominalmente porque no tenemos cómo marcar el voto y puede haber gente que tenga reuma. (Risas.)

**Sr. Velázquez.** — Si está fallando el sistema electrónico, solicito que se vote nominalmente.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente** (de la Rúa). — Como hay asentimiento, se va a votar el artículo 5º del dictamen en la forma indicada.

—Se practica la votación nominal.

—Al emitir su voto dice el

**Sr. Aguirre Lanari.** — Voto por la negativa y quiero dejar constancia de los motivos. En el curso del debate en general, hemos formulado nuestras críticas a aspectos particulares y precisamente éste es uno de los aspectos en los que expresamos nuestra disconformidad. Esto no quiere decir que no la tengamos con respecto a otros artículos, pero como se ha propuesto la votación nominal, me veo en la obligación de dejar constancia de mi voto.

**Sr. Presidente** (de la Rúa). — La Presidencia desea preguntar al señor senador por Corrientes si ha propuesto alguna modificación a este artículo o simplemente desea dejar a salvo su opinión.

**Sr. Aguirre Lanari.** — Adherí en su oportunidad a lo expresado por el señor senador Martiarena y así debe constar en la versión taquigráfica.

—Continúa la votación nominal.

—Vota por la negativa el señor senador Benítez.

—Al emitir su voto dice el

**Sr. Brasesco.** — Voto por la afirmativa teniendo en cuenta que cuando hacemos referencia a "tratado suscrito", se necesita la ratificación del Congreso de la Nación para que tenga el valor de norma constitucional. Por estas circunstancias, estimo que las consideraciones que se han hecho no tienen relevancia ni validez.

—Continúa la votación nominal.

—Al emitir su voto dice el

**Sr. Bravo.** — Al no modificarse el artículo 2º, la bancada bloquista votó en general en contra de esta ley. Por lo tanto, en particular también el voto es negativo.

**Sr. Presidente** (de la Rúa). — ¿Cuál es el sentido del voto sobre el artículo?

**Sr. Bravo.** — Negativo, señor presidente.

—Continúa la votación nominal.

—Votan por la afirmativa los señores senadores de la Rúa, Falsone, Genoud, Grosso, Gurdulich de Correa, Lafferrière, Malharro de Torres, Mauhum y Mazzucco.

—Votan por la negativa los señores senadores Gil y Martiarena.

—Al emitir su voto dice el

**Sr. Menem.** — Quiero aclarar el sentido de mi voto. Considero atinadas las observaciones formuladas por el señor senador por Jujuy, pero creo que con la aclaración que hizo el señor senador por Entre Ríos queda perfectamente determinado el sentido de la norma. Por ello, voto por la afirmativa.

—Continúa la votación nominal.

—Votan por la afirmativa los señores senadores Nápoli, Romero, Rubeo, Trilla y Velázquez.

—Votan por la negativa los señores senadores Molina, Murguía, Nieves, Rivas, Rodríguez Saá, Romero Feris, Saadi, Sánchez y Tenev.

—Al emitir su voto dice el

**Sr. Vidal.** — Voto por la negativa, y voy a fundamentar por qué.

Entiendo que se trata de un proyecto de ley que ha sido compatibilizado, pero no todos los legisladores han estado en la Mesa del Consenso. Si la ley puede ser mejorada, hay que dar la opción en ese sentido. De todas maneras las fuerzas armadas y el país van a tener la ley que están buscando.

**Sr. Trilla.** — Pido la palabra para hacer una aclaración al señor senador Vidal.

**Sr. León.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (de la Rúa). — Advierto que se está votando.

**Sr. León.** — Que termine la votación.

**Sr. de la Rúa.** — ¿Quiere el señor senador indicar su voto? No ha terminado la votación; puede votar.

—Vota por la afirmativa el señor senador León.

**Sr. Secretario** (Macris). — Han votado diecisiete señores senadores por la afirmativa y quince por la negativa.

**Sr. Presidente** (de la Rúa). — Queda aprobado el artículo 5º.

**Sr. Trilla.** — Pido la palabra para aclararle algo al señor senador Vidal.

En la Mesa del Consenso, si bien es cierto que el MID planteó sus reparos a la ley, estuvo presente a través de los doctores Zaffore y Rognoni. De tal manera que participó y ha hecho llegar la opinión del partido.

**Sr. Presidente** (de la Rúa). — Está bien, señor senador, pero no hay nada en discusión.

**Sr. Trilla.** — Era una aclaración, señor presidente.



**Sr. Presidente (de la Rúa).** — Continúa la consideración en particular.

—Se leen y aprueban los artículos 6º al 12.  
—Se lee el artículo 13.

**Sr. Romero Feris.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (de la Rúa).** — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

**Sr. Romero Feris.** — Señor presidente: nosotros hemos votado en general en contra del proyecto y señalamos nuestras discrepancias, en un momento del debate, incluso sobre algunos casos particulares.

En la Mesa del Consenso ya habíamos indicado oportunamente nuestras diferencias con este proyecto.

El artículo 13 se refiere a mecanismos de alerta; proponemos su derogación. Hubiéramos querido hacer algunas observaciones con relación a artículos anteriores, pero no las hicimos porque ya votamos en general en contra de este proyecto.

Con respecto al artículo 13, quiero proponer concretamente su derogación; pero en caso de mantenerse, sugerimos que se incluya una definición de las cuatro situaciones de conflicto previsibles, como lo hacía el proyecto justicialista inspirador. Proponemos, además, la inclusión dentro del marco de la situación nacional de una quinta hipótesis, denominada "artículo 86, inciso 17 de la Constitución", que prevea la facultad constitucional del presidente de la Nación de utilizar las fuerzas armadas en el marco interno, en los casos que la Constitución denomina conmoción interior, a fin de armonizar este cuerpo legal con la Carta Magna.

**Sr. Presidente (de la Rúa).** — Para ordenar la votación, señor senador, usted propone la derogación. Entiendo que se refiere a suprimir el artículo, pero propone un agregado también; hay que ver si la comisión lo acepta a fin de poner a votación el dictamen con el agregado o sin él.

**Sr. Romero Feris.** — En primer lugar, propongo la derogación del artículo.

**Sr. Presidente (de la Rúa).** — ¿Pero qué propone agregar?

**Sr. Romero Feris.** — Lo que acabo de manifestar.

**Sr. Presidente (de la Rúa).** — ¿Puede leer el texto?

**Sr. Romero Feris.** — En caso de mantenerse, sugerimos que se incluya una definición de las cuatro situaciones de conflicto previsibles, como lo hacía el proyecto justicialista inspirador.

**Sr. Presidente (de la Rúa).** — Pero eso no se puede poner así en el artículo. Hay que proponer un texto y preguntarle a la comisión si lo acepta.

**Sra. Gurdulich de Correa.** — Pido la palabra para una aclaración.

**Sr. Presidente (de la Rúa).** — Tiene la palabra la señora senadora por Santa Fe.

**Sra. Gurdulich de Correa.** — En los artículos anteriores se aclara perfectamente que esto no es nada más que una indicación al Consejo de Defensa, que asesora al presidente de la Nación. Las facultades constitucionales del presidente están absolutamente preservadas y expresadas en uno de los artículos anteriores, como ya lo planteé en la discusión en general. De ninguna manera estas formulaciones indicativas cercenan las facultades constitucionales del presidente de la Nación, que es quien tiene la decisión con respecto a todos estos temas.

Este artículo 13 se refiere a un cuadro indicativo para el Consejo de Defensa, que, como dije, asesora al presidente de la Nación. El es el comandante en jefe de las fuerzas armadas y, por lo tanto, tiene todas las facultades constitucionales para hacer uso de ellas cuando lo crea conveniente. Insisto en que esto es nada más que indicativo, y que en uno de los artículos anteriores se expresa claramente que se preservan las facultades constitucionales del señor presidente.

En cuanto al otro punto, al eliminarse la explicación de cada una de las situaciones a que se refiere el señor senador, formulé oportunamente apreciaciones durante la discusión en general para que sirvieran de base a los efectos de la interpretación de la ley.

Además, este artículo ya había sido votado por unanimidad, porque en el proyecto que votamos en la última oportunidad figuraba esta disposición. Es cierto que ahora se eliminan estas explicaciones. Pero ya me referí a este punto en la discusión en general, para la interpretación posterior. Creo que eso se puede resolver incorporando las cuatro explicitaciones para la interpretación del cuadro. Pero, insisto, el agregado propuesto ya está implícito en el proyecto, y de ninguna manera un organismo de asesoramiento puede cercenar las facultades constitucionales del presidente de la Nación.

**Sr. Presidente (de la Rúa).** — ¿Ese es el pensamiento de la comisión?

**Sr. Trilla.** — Así es, señor presidente.

Quiero reafirmar lo expresado por la señora senadora por Santa Fe, señalando que en las

reuniones celebradas por las comisiones que estudiaron este proyecto se trató siempre de enfatizar las atribuciones constitucionales del señor presidente de la República, y de ninguna manera de definir situaciones que pudieran disminuir estas atribuciones como comandante en jefe de las fuerzas armadas.

**Sr. Presidente (de la Rúa).** — Se va a votar el artículo 13 tal como figura en el dictamen.

—La votación resulta afirmativa.

—Se leen y aprueban los artículos 14 al 19.

—Se lee el artículo 20.

**Sr. Presidente (de la Rúa).** — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

**Sr. Martiarena.** — Señor presidente: he propuesto, e insisto en proponer, que se suprima la siguiente oración: "Sus miembros se encuadrarán en toda circunstancia bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados".

Ya me he expresado sobre la confusión que esto puede crear, ya que no es admisible que en el orden jerárquico militar quien tiene mando responda por toda clase de conducta de sus subordinados. Esto altera lo expresado en el Código de Justicia Militar, por lo cual propongo que se elimine.

Además, parecería que este texto es la ratificación de la ley de obediencia debida, toda vez que se está estableciendo que en toda circunstancia los mandos responden por la conducta de los subordinados, lo que no resulta admisible de acuerdo con nuestra experiencia histórica del Proceso y con lo que se puede prever para el futuro.

Las fuerzas armadas tienen un régimen orgánico interno en el cual el acto de servicio es el que conduce a la obediencia y a la responsabilidad que puede derivarse. Entonces, no puede ser que nosotros digamos que "...en toda circunstancia (esto significa en cualquiera) bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados...". Si decimos así caemos en la tesis de la obediencia ciega y mecánica, lo cual en general siempre hemos repudiado y nunca hemos estado de acuerdo con ello.

Cuando se presenten circunstancias relacionadas con actos cumplidos en violación de leyes fundamentales o que importen aberraciones o desvíos de conducta que no están autorizados por la moral, por las costumbres o por ninguna otra ley, la responsabilidad también debe recaer —en el orden actualmente establecido así recae— en el subordinado que no se opone a órdenes de tal naturaleza. Por estas razones he pedido la supresión de ese párrafo.

**Sr. Presidente (de la Rúa).** — ¿La comisión acepta ese criterio?

**Sr. Trilla.** — Este problema también fue considerado en detalle, como lo manifiesta el señor senador por Jujuy, pero está encuadrado dentro de lo que es el ordenamiento militar y también de lo que significan los reglamentos internos de las fuerzas armadas, donde tales circunstancias están perfectamente delimitadas; también se tuvo presente lo dispuesto por el Código de Justicia Militar. De tal manera que nunca puede vincularse este criterio que nosotros sustentamos con lo dispuesto por la ley de obediencia debida, por cuanto esa norma tiene efectos para los episodios ocurridos en el pasado y no hacia el futuro. Esa ley trata los aspectos históricos de la cuestión y no pueden proponerse las simetrías que se han mencionado, por lo cual manifiesto que debemos votar el artículo tal cual aparece en el dictamen de la comisión.

**Sr. Presidente (de la Rúa).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 20 tal como figura en el dictamen de la comisión.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Martiarena.** — Pido que se rectifique la votación porque entiendo que no fue aprobado.

**Sr. Presidente (de la Rúa).** — Sírvanse indicar nuevamente su voto, señores senadores. Por Secretaría se informará el resultado de la votación.

—Se practica nuevamente la votación.

**Sr. Secretario (Macris).** — Sobre un total de treinta y dos señores senadores, dieciocho votos fueron a favor.

**Sr. Presidente (de la Rúa).** — Queda aprobado el artículo 20.

—Se leen y aprueban los artículos 21 a 26.

—Se lee el artículo 27.

**Sr. Martiarena.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (de la Rúa).** — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

**Sr. Martiarena.** — Propongo que se agregue a este artículo un párrafo que diga: "La ley fijará qué autoridad, en qué circunstancia particular y con qué extensión se efectuará la convocatoria para la prestación del servicio civil". Sugiero su incorporación para evitar que se suponga que, en cualquier momento, cualquier autoridad puede convocar o requerir la prestación del servicio civil, a pesar de que está contemplado que este asunto debe ser materia de la ley específica que se dicte sobre el tema. Así.

mismo, como este proyecto extiende a trescientos sesenta y cinco días la posibilidad de dictar dicha norma —lo cual además es sólo una simple posibilidad—, creo que en este artículo debe quedar establecido claramente el punto de la requisición de los servicios civiles.

**Sr. Presidente (de la Rúa).** — ¿La comisión acepta la propuesta?

**Sr. Trilla.** — No la acepta. La comisión estableció como una orientación generalizada en este proyecto de ley el criterio de evitar las reiteraciones propias de cada uno de los conceptos que, entonces, podrían ser más extensos en su alcance, y se dejó librado a lo que indica el artículo 46, inciso c), que establece que uno de los temas legislativos que deberán tratarse es la ley de organización territorial y movilización para la defensa, que incluye las disposiciones relativas al servicio militar y civil, y en esa ley determinar todas las particularidades del caso.

Por lo tanto, consideramos que el artículo 27 debe quedar redactado de acuerdo con lo propuesto en el dictamen de comisión.

**Sr. Presidente (de la Rúa).** — Se va a votar el artículo 27 tal como figura en el dictamen.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee y aprueba el artículo 28.

—Se lee el artículo 29.

**Sr. Martiarena.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (de la Rúa).** — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

**Sr. Martiarena.** — Señor presidente: propongo que en este artículo se suprima la expresión "... en aquellos supuestos en los que las circunstancias lo hicieran estrictamente indispensable".

Este artículo se está refiriendo a la aplicación eventual del artículo 6º de la Constitución, es decir, al dictado de una intervención federal en alguna provincia y a determinados casos de la aplicación de esta ley.

He sostenido y sostengo que no podemos crear circunstancias de ninguna naturaleza fuera de las que están expresadas en el artículo 6º de la Constitución. Considero que cuando el artículo 29 expresa "... en aquellos supuestos en los que las circunstancias lo hicieran estrictamente indispensable", está avanzando sobre el texto constitucional que fija con toda precisión cuáles son los motivos para intervenir los gobiernos provinciales.

Por lo expuesto opino que este párrafo desvirtúa el artículo 6º de la Constitución y abre un supuesto de arbitrio que no es constitucional.

**Sr. Presidente (de la Rúa).** — ¿La comisión acepta la modificación propuesta?

**Sr. Trilla.** — No, no la acepta, porque este tema fue analizado en detalle; y precisamente es para enfatizar las disposiciones del artículo 6º de la Constitución y la prudencia de los casos que pueden presentarse en este terreno, que se ha decidido que figure la palabra "indispensable".

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el artículo 29 tal como figura en el dictamen.

—La votación resulta afirmativa.

—Se leen y aprueban los artículos 30 a 33.

—Se lee el artículo 34.

**Sr. Martiarena.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (de la Rúa).** — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

**Sr. Martiarena.** — Señor presidente: en este artículo propongo agregar el siguiente párrafo: "El Estado nacional responderá de las consecuencias perjudiciales que se produzcan por violaciones en que se incurra de la reserva y/o destino previsto de la información, ello sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que correspondiere al autor de esa violación".

La norma trata de los casos en que se puede requerir información bajo la condición de reserva y de no darle ningún otro destino fuera del que está previsto por la autoridad que solicita la información en un momento dado, pero no establece qué sucederá cuando ese principio o esa norma sea violada.

Tal como está, esta norma se prestará a que la irresponsabilidad sea una consecuencia del dispositivo incluido en el proyecto de ley. Debe estar perfectamente establecido que el Estado se hará responsable cuando sus agentes, militares o no, en los casos de aplicación de la ley de defensa nacional, requieran información reservada para un destino perfectamente establecido y que, en lugar de mantenerla reservada, la divulguen, transmitan o no le den el destino previsto cuando al ciudadano particular, civil se le pide que proporcione una información que se considere indispensable.

Por el agregado que propongo trato de proteger el derecho que tiene el ciudadano de que en la eventualidad de tener que dar información reservada, esa reserva sea efectiva y no haya ninguna clase de distorsión del propósito de la ley.

**Sr. Presidente (de la Rúa).** — ¿Me permite, señor senador, formularle una pregunta? ¿Lo



que usted propone es suprimir la última oración del segundo párrafo del artículo 34?

**Sr. Martiarena.** — No, señor presidente. Propongo agregar en el segundo párrafo del artículo 34, luego de la expresión: "La información obtenida tendrá carácter de reservada y no podrá tener otro destino ni otro uso que el de satisfacer esas necesidades"; el siguiente párrafo: "El Estado nacional responderá de las consecuencias perjudiciales que se produzcan por violaciones en que se incurra de la reserva y/o destino previsto de la información, ello sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que correspondiere al autor de esa violación".

**Sr. Presidente (de la Rúa).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. Trilla.** — Hemos considerado este asunto y entendemos que se trata de una pieza global respecto de la que, al momento de la votación, no debemos aceptar conceptos extraños en cuanto a la situación ya planteada, porque habría una ampliación de conceptos que nos llevarían a interpretaciones distintas.

De tal manera, deseamos mantener el texto tal cual está redactado en el dictamen, considerando que en lo que se refiere a algunas de las circunstancias ya indicadas, existen las respectivas leyes.

**Sr. Presidente (de la Rúa).** — Se va a votar el artículo 34 tal como figura en el dictamen.

—La votación resulta afirmativa.

—Se leen y aprueban los artículos 35 al 48.

—El artículo 49 es de forma.

**Sr. Presidente (de la Rúa).** — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

**Sr. Presidente (de la Rúa).** — En primer lugar, informaremos al cuerpo que, de acuerdo con lo resuelto, corresponde considerar el informe del señor ministro.

Por Secretaría se dará lectura a la resolución del Honorable Senado y, luego, podremos tener en cuenta la solicitud del señor senador por Río Negro.

**Sr. Secretario (Macris).** — (Lee)

*El Senado de la Nación*

**RESUELVE:**

Invitar al señor ministro de Educación y Justicia a concurrir, de conformidad con el artículo 63 de la Constitución Nacional, a la sesión que se celebrará el 13 de abril de 1988, a las 17,00 horas, a fin de brindar la información de que disponga sobre:

1) La situación salarial de la docencia.

2) La situación actual del conflicto docente y las gestiones realizadas desde diciembre de 1987 para evitarlo, así como la participación en ellas del Consejo Federal de Educación, y

3) Las posibles vías de solución del mismo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de abril del año mil novecientos ochenta y ocho.

**EDISON OTERO.**  
*Antonio J. Macris.*

**Sr. Presidente (de la Rúa).** — Invito al Honorable Senado a pasar a un breve cuarto intermedio con permanencia en las bancas, hasta que el señor ministro ingrese en el recinto.

A su vez, por Secretaría se adoptarán las disposiciones adecuadas para invitar al señor minis-